

Perú: El fujimorismo del gobierno de Alejandro Toledo *

Aníbal Quijano **

Nueve meses apenas después de jurar como presidente de la República del Perú, Alejandro Toledo ya había superado una marca nacional: según las encuestas de opinión pública, a fines de Abril sólo el 26% de los peruanos aprobaba su gobierno. Ninguno de sus antecesores en el cargo había alcanzado tan baja marca en tan breve tiempo. Para contrarrestar esa imagen, pocos días después de la publicación de los resultados de esa encuesta Toledo decidió darse un baño de popularidad visitando Gamarra, el más famoso y más importante centro comercial de la “economía informal” limeña. Pero lo recibió una masiva rechifla y una lluvia de botellas de plástico y de frutas y verduras podridas, que la televisión y los periódicos no tuvieron más remedio que registrar y difundir. Frente al escándalo político, el Ministro del Interior no titubeó en declarar que esas acciones eran sólo deliberadas maniobras políticas dirigidas a desestabilizar la democracia en el país. Pero la siguiente encuesta encontró que aquel índice de aprobación se había reducido al 23%.

A mediados de Mayo, Toledo viajó a Madrid a otra reunión cumbre de los presidentes latinoamericanos con los de la Unión Europea. La TV limeña no dejó de mostrarlo saludando a Aznar, Chirac o Blair, como augurio de importantes acuerdos comerciales y financieros favorables al Perú. Pero Toledo regresó con las manos vacías ya que sólo Chile y México fueron beneficiarios de tales acuerdos. Con todo, su partido logró juntar unas pocas decenas de miles de sus simpatizantes para recibirlo en una manifestación pública. Y en esa ocasión, además de reiterar, una vez más, sus promesas electorales, proclamó insólitamente que quienes no estaban allí eran enemigos de la democracia. La posterior y más reciente encuesta de opinión pública (El Comercio, 20 de Mayo del 2002, a3) registra que ahora sólo el 22% de los peruanos aprueba la gestión de Toledo, y que el 71% rechaza su política económica, contra apenas el 17% que la aprueba. Y casi seguramente, el descenso aún no ha concluido, aunque la esposa de Toledo ha amenazado con represalias a las encuestadoras.

Del otro lado, la protesta de las masas por el continuado deterioro de su situación económica, sin cualquier señal de mejoría, puebla las calles de todas las ciudades del país, virtualmente todos los días. A comienzos de Mayo, un paro regional organizado por los Frentes Regionales y las Municipalidades Provinciales, fue acatado por la totalidad de la población de los departamentos del Sur y del Centro (Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno, Tacna y Apurímac, Ayacucho, Cerro de Pasco, Junín, Huánuco) en oposición a la privatización de las instalaciones regionales de producción de servicios públicos vitales, electricidad y agua potable, principalmente. En Yurimaguas, ciudad de la amazonía peruana, la población en masa tomó de rehen al Alcalde, del partido de Toledo, con graves acusaciones, reclamando la presencia de autoridades competentes para tomar decisiones que resuelvan sin dilación esos problemas.

Recientemente, el 14 de Mayo se realizó un Paro Nacional organizado por las centrales sindicales y los frentes regionales. La prensa y los voceros oficiales admiten que en las ciudades provinciales el Paro fue acatado por la amplia mayoría de la población, pero también proclaman que en Lima fue parcial y minoritario. Todos coinciden, no obstante, en que se trata de una seria advertencia de las masas contra la política económica del gobierno de Toledo. El 22 de Mayo, decenas de miles de gentes de los barrios pobres de Lima desfilaron por las calles oponiéndose a la privatización del servicio de agua potable de la ciudad.

Esta no es una situación nueva. Viene desde hace varios meses. El 16 de abril los departamentos de la Región Sur realizaron una total paralización de actividades, en protesta contra la anunciada privatización de EGASA y de EGESUR, centrales regionales de producción de energía eléctrica. El Frente Regional de la Amazonía levantó a la mayoría de la población y produjo en Iquitos, la más importante ciudad de dicha zona, un conflicto político de repercusión nacional, en demanda del cumplimiento de las promesas electorales de Toledo, referentes sobre todo a medidas para la reactivación económica de una de las zonas ahora más deprimidas del país. En el Norte del país, en Chimbote y Trujillo sobre todo, la población ha salido a las calles con frecuencia en demanda de mejoras económicas. Y, por supuesto, Lima es el frecuente escenario diario de masas recorriendo las calles en demanda de empleo, de salario, de devolución de derechos conculcados como la negociación sindical por ramas de actividad o el cumplimiento de la decisión del Congreso de re-legalizar la jornada de 8 horas, suprimida bajo el fujimorismo.

Ya en Marzo, antes de la visita de Bush a Lima, crecía una auténtica marejada de diarias protestas callejeras en todas las ciudades del país, demandando el término de la política económica neoliberal, que continúa la que realizaba el fujimorismo, y el cambio del Ministro de Economía y de sus principales funcionarios, casi todos procedentes de la administración fujimorista. El 20 de Marzo un coche-bomba estalló cerca de la Embajada de Estados Unidos, causando la muerte de 10 personas e hiriendo a muchos. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables. Pero el Gobierno de Toledo, por iniciativa de su Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, aprovechó el clima de opinión que ese acto terrorista había causado, para lograr mayoría en el Congreso y hacer aprobar nuevas leyes represivas. Dos son las más importantes y sintomáticas: 1) La policía está ahora legalmente autorizada a interceptar los teléfonos y la correspondencia privados sin necesidad de autorización judicial. Lo hacían, en realidad, desde hace tiempo. Pero ahora con la protección de la ley, es decir conculcando el derecho a la reclamación. 2) Los que en una marcha o manifestación política “estorben” el tránsito en la calle pueden ser, por tan grave delito, condenados a prisión hasta por seis años. Ni Fujimori se había animado a tanto.

Esa política represiva y la alarma antiterrorista en un país que sufrió durante más de una década una feroz “guerra sucia”, el intercambio entre terrorismo de estado y terrorismo subversivo, lograron entonces neutralizar las protestas callejeras y reducir su masividad y virulencia. Pero como ahora se observa, no por mucho tiempo. Las víctimas del neoliberalismo, continuado por más de una década también, han vuelto a las calles y a la resistencia en todo el Perú, demandando un cambio real y pronto de esa política. El problema es que tales demandas son dirigidas al mismo gobierno cuyos sentido y estructura constitutivas son, precisamente, la continuación y la profundización de dicha política.

Perú, país estancado

La explicación y el sentido de tal escenario peruano caben en pocas palabras: el Perú es un país estancado. Y, en lo inmediato, sin ninguna señal de salida hacia horizonte alguno.

Al término del fujimorismo, la recesión económica se prolongaba ya por tercer año consecutivo. Hoy se arrastra por su cuarto año. La desarticulación de la previa estructura productiva, que ya se ordenaba en torno del predominio industrial y comercial, y su completa re-primarización, realizadas bajo el fujimorismo y el neoliberalismo, no se han hecho sino más profundas y definitivas. La estructura social constituida entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 80, ha sido desintegrada totalmente y la que existe es cada vez más precaria, fragmentaria e inestable. Los espacios ganados por la población dominada y las capas intermedias en el Estado después de la Segunda Guerra Mundial, fueron casi eliminados por el fujimorismo y el proceso de democratización y de nacionalización de la sociedad y del Estado fue bloqueado y distorsionado. El Estado fue re-privatizado, separado de toda intervención de la vasta mayoría de la población y puesto bajo el control de una tecnoburocracia formada por funcionarios, asociados y clientes del capital financiero mundial. No obstante la crisis y la derrota políticas del fujimorismo, esa situación no ha sido revertida con el gobierno de Toledo, ni tiende a serlo, y el país ha ingresado en el cauce de una inestabilidad social y política que se mueve en dirección a una crisis abierta.

La política económica

de Kuczynsky-Toledo: recesion, desinversion, desempleo, pobreza

Hasta hace poco, el gobierno de Toledo insistía en que la actividad económica había comenzado a reactivarse en el último trimestre. La cifra oficial difundida por el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, llegaba al 3.3%. Ya había, sin embargo, consenso entre los economistas y la mayoría de los empresarios en que descartada Antamina, una de las minas más grandes y productivas del país, la cifra podía quizá llegar al 2% y que, por lo demás, el resultado en dicha mina dependía de las fluctuaciones del mercado mundial y no debía nada a la política económica del actual gobierno. Pero el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo del Estado, informó que la cifra real era de 1.6%. Y, finalmente, el propio Kuczynski, jaqueado por una amenaza de interpelación parlamentaria, ha terminado confirmando esa información (La República, 8/Mayo/02. Lima, Perú). Esto es, no hemos siquiera comenzado a salir de la recesión, sobre todo frente a las cifras negativas de la industria (- 4.3%), en particular en el rubro de la producción de alimentos (-5.4%). Ni se ve cómo, en esta política económica, eso sería posible.

Entre tanto, las exportaciones del primer cuatrimestre de este año bajaron en 4.8% respecto del período similar del 2001. Incluso la importaciones bajaron 5.3%, por que disminuyó la compra de bienes de capital e insumos (aunque en Abril aumentaron por la compra de bienes de uso y consumo duradero). Pero la balanza comercial fue negativa, y el déficit fue superior en 8.9% al del período equivalente el año anterior y el déficit en cuenta corriente llegó a ser el 2.6% del PBI (Informaciones del Banco Central de Reserva y de la Cámara de Comercio. El Comercio, 27/05/02, pp.b1-b2. Lima, Perú).

El problema es que para las víctimas del neoliberalismo, que son la abrumadora mayoría de la población peruana, la continuación de la recesión económica implica

un continuado y diario empeoramiento de su ya catastrófica situación. Cuando el fujimorismo fue derrotado, de cada 100 peruanos, según las cifras oficiales, 57 no tenían el equivalente de un dólar diario para cubrir sus necesidades básicas y cerca de 30 ni siquiera medio dólar diario. Un año después, el porcentaje de peruanos pobres, los que no logran satisfacer sus necesidades básicas, sobrepasa el 60%. Al término del fujimorismo, el desempleo abierto en el Perú no había llegado, de nuevo según las cifras oficiales, al 10% de la población económicamente activa (PEA). Pero el subempleo alcanzaba a más del 50% de ella. Nueve meses después, el desempleo abierto es del 11% de la PEA y el subempleo afectaba en el 2001 al 47.6% sólo en el sector urbano. En el conjunto del país la cifra sobrepasaría largamente el 60% de esa población. Y puesto que no hay inversiones nuevas, internacionales o locales, privadas o públicas, las perspectivas de empleo en el futuro próximo son simplemente sombrías.

Si se observa la política de salarios del gobierno de Kuczynski-Toledo, no sólo se ha mantenido, sino que se ha acentuado la creciente distancia entre los salarios de los trabajadores y los de la tecnoburocracia estatal y privada que había sido iniciada con el fujimorismo. Este congeló el salario de los trabajadores estatales, pero levantó desmedidamente el salario y los ingresos de su tecnoburocracia pública, organizó listas secretas de los salarios más elevados, así como listas secretas de los privilegiados en el Sistema Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), contrató con el PNUD la administración de salarios en miles de dólares, para producir la impresión de que se trataba de sueldos internacionales que, sin embargo, provenían del propio erario público. Y como es mundialmente conocido ahora, distribuyó ilegalmente entre el núcleo interno de la mafia los recursos normales del Estado y los más de 9 mil millones de dólares que provenían de la “privatización” o remate del capital estatal, y amparó el tráfico ilegal de armas y de droga para aumentar los ingresos de la mafia.

Al mismo tiempo, el fujimorismo amparó la reducción del salario de los trabajadores de la empresa privada, mientras se desmantelaba la estructura productiva industrial y el capital ocupaba la “economía informal” y organizaba allí un sistema de sobre-explotación de los trabajadores, por medio del aumento del tiempo de trabajo a 12 o 14 diarias y de la simultánea drástica reducción del salario. Ese régimen de trabajo prolongado por casi una década, se convirtió en un orden natural para los empresarios. Cuando al comienzo mismo del gobierno de Toledo, las centrales sindicales y un sector de parlamentarios comenzaron a presionar por la re-legalización de la jornada de 8 horas diarias, el dirigente máximo de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleisser, no vaciló en declarar a la TV, con una sonrisa, que pensar en una jornada de 8 horas era “puro surrealismo”.

En el gobierno de Kuczynski-Toledo, por el momento no es probable que la rapiña ilegal del presupuesto estatal sea ya tan vasta y sistemática como en los tiempos del fujimorismo. Pero los salarios de los trabajadores estatales, en especial de cientos de miles de profesores de todos los niveles del sistema de educación pública, siguen congelados, mientras los de la tecnoburocracia política siguen en alza. Para comenzar, inmediatamente después de jurar como el nuevo Presidente de la República, Alejandro Toledo se asignó 19 mil dólares mensuales de sueldo y pasó a ser el Presidente más caro de la historia peruana y latinoamericana (aunque frente a la repulsa pública y a la expresa petición de los líderes de oposición ofreció reducirlo a 12 mil por mes, no hay sobre eso información concreta disponible en este momento). Los contratos fujimóricos con el PNUD se han mantenido para un

grupo privilegiado de funcionarios públicos que reciben altos salarios de miles de dólares. Y, por supuesto, los salarios de los trabajadores de la empresa privada siguen, en promedio, bajando al mismo tiempo en que crece el desempleo y se mantiene la “informalidad” del capital. Como hace notar ANALISIS SALARIAL, una conocida institución privada de estudios salariales, en su reciente edición de marzo del 2002, el aumento de 50 soles (11 dólares al cambio corriente) a los empleados públicos, así como la oferta de salario de 320 soles mensuales para el programa A Trabajar Urbano es “una muestra de falta de iniciativas en el campo de las remuneraciones, al menos públicas”. Sin embargo no siempre falta iniciativas y algunas pueden ser perversas. Por ejemplo, el gobierno estableció que las viudas reciban solamente el 50% de la pensión de jubilación que sus maridos tenían al momento de morir. Así la viuda de un profesor universitario jubilado en una universidad estatal cuya pensión máxima es de unos 325 dólares mensuales (según el cambio del día), recibiría apenas la mitad cuando ella misma ya no está, probablemente, en condiciones de obtener empleo y salario u otros ingresos. Claro está que hay un pequeño grupo de funcionarios estatales cuyas pensiones de jubilación suman miles de dólares. Pero, como es normal, la ley se hace contra la mayoría.

Así, la reconcentración de ingresos, como parte de la reconcentración mundial del control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, acentúa y acelera en el Perú la extrema polarización social de la población. Como en todas partes del mundo globalizado en los términos del neoliberalismo, las víctimas de esa política han sido encajonadas en una perversa trampa: sin el mercado no se puede sobrevivir y con el mercado no se puede sobrevivir. Y como se observa sin dificultad, las razones no son misteriosas, ni “naturales”.

Política fiscal recesiva

Dada la situación mundial, en particular la recesión en los países “centrales”, sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón, dada la crisis de Argentina y la inestabilidad social y política de toda América Latina, no es difícil entender que no haya inversión privada internacional en el Perú. La inversión privada “nacional”, esto es, la de los capitalistas peruanos, se lleva a cabo, principalmente, en los paraísos fiscales del exterior. Eso se remite a la vieja relación dependiente de la burguesía peruana con la del “centro”. Pero que no haya inversión estatal en el momento más necesario, requiere otra explicación.

Oficialmente, la falta de inversión estatal se debería a la falta de recursos fiscales. En el debate público, sin embargo, se sabe que el Estado dispone actualmente de alrededor de 10 mil millones de dólares de reservas internacionales y que hay créditos acordados, pero no desembolsados por falta de proyectos específicos, por otros mil millones. La oposición aprista demanda porqué dichos recursos no se usan para reactivar el capitalismo en el país. La respuesta oficial usa el fantasma de la hiperinflación desatada por el capital financiero en el tramo final del gobierno aprista, para sostener que una rigurosa disciplina fiscal es necesaria para evitar, precisamente, la repetición de esa experiencia. Esta se atribuye, por supuesto, sólo a la política fiscal y monetaria.

Pero en el período del gobierno aprista la inflación era el flagelo común a los principales países de la región, a pesar de las diferencias en las políticas fiscales, porque era parte de una política del capital financiero. Desde la perspectiva de hoy,

ese período inflacionario desoculta una política destinada a terminar de dismantlar los debilitados restos de regímenes y políticas económicas vinculados sea al nacionalismo-democrático-popular, a deslegitimar toda resistencia al “ajuste estructural” y a la imposición del neoliberalismo. Los planes llamados Cruzado, Austral o Inti, en Brasil, Argentina y Perú, respectivamente, así como sus fracasos y las correspondientes secuencias políticas, son testimonio preciso de esa política del capital financiero y de sus consecuencias. En el Perú esa política se hizo virulenta al final del gobierno de Alan García, como represalia contra el intento de estatización de la banca y de todo el sistema de intermediación financiera.

Actualmente, sin embargo, la inflación no es el problema de la economía peruana, sino la tendencia deflacionaria que sigue la política fiscal mientras se acentúa la concentración de ingresos. En efecto, ya en el tramo final del fujimorismo la inflación era virtualmente plana. En Julio del 2001, la tasa anualizada era ya solamente del 1.98%. Y en una economía tan largamente estancada, con más de la mitad de la población en situación de pobreza crítica, las tasas últimas apuntaban a una deflación. Así, entre Abril del 2001 y Abril 2002 la cifra era ya sólo de 0.05% y la tasa actual anualizada para el 2002 será, probablemente, menor. Es decir, tras el prolongado estancamiento, la deflación está en curso. Y esa es, exactamente, la medida del continuado descenso de la capacidad de consumo de la población peruana y la demostración eficaz de que la creciente gran mayoría de los peruanos, después de una década de continuado neoliberalismo, es cada día más pobre.

Lo que el argumento oficial trata de ocultar es que los acuerdos con el FMI obligan a mantener el déficit fiscal en 1.9% anual, lo que a su vez obliga a reducir la inversión y los gastos fiscales. Esa política privilegia, como en todos los países sometidos al dominio del capital financiero mundial, el pago de los servicios crecientes de una impagable deuda internacional, y que, sin embargo, acaba de ser aumentada por el gobierno de Kuczynski-Toledo, por medio de una maniobra financiera cuyo sentido sera discutido más adelante. Por si no fuera suficiente, la actual política fiscal mantiene la exoneración de impuestos, por casi una década, a las 5 mayores empresas internacionales que operan en el país, por cerca de 400 millones de dólares. Dicha exoneración fue decidida por el fujimorismo, pero el régimen de Toledo la ha ratificado contra la protesta de la población.

La falta de inversión privada local está relacionada también, sin duda, a las altas tasas de interés del capital financiero en el Perú (20% anual en Soles y 10% en Dólares), a pesar de la baja de las tasas internacionales. Por supuesto, la política neoliberal bloquea toda posibilidad de control o de regulación local de dichas tasas, no obstante que en Estados Unidos, el estado hegemónico del Bloque Imperial Global, la regulación de dichas tasas es, famosamente, la ocupación principal del Sr. Greenspan, la suprema autoridad federal de la política monetaria de ese país. Las altas tasas de interés refuerzan la recesión de un país donde casi el 80% de los depósitos en la banca está en dólares y por consecuencia los créditos tienen que hacerse, principalmente, en esa moneda. Y, desde luego, los precios corrientes del mercado son medidos también según ella, aunque el dólar se mantiene con pequeñas fluctuaciones en un nivel de cambio probablemente subvaluado.

La política financiera:

¿la deuda internacional, un nuevo tributo colonial?

Durante la campaña electoral, Toledo y su equipo insistieron en que tenían un proyecto económico de largo plazo para el país y un programa detallado de trabajo en el corto plazo para la inmediata reactivación económica. Pero si algo ha quedado

claro en estos nueve primeros meses de gobierno, sin duda es la total ausencia de cualquier programa sectorial o general de reactivación económica. La única y reiterada insistencia recae sobre la necesidad de dar al capital financiero internacional todas las señales que le den la confianza necesaria para invertir en el Perú. Y eso explica la reticencia a devolver a los trabajadores los derechos conculcados, la negativa total a usar los recursos fiscales para financiar la industria y la agricultura paralizadas, a levantar la capacidad adquisitiva de una población que se asfixia en la pobreza y que lleva a cientos de miles de niños a la mendicidad, a la prostitución y a la sobre-explotación en actividades de probada rudeza.

Por razones que ahora son virtualmente obvias para cualquier observador, no existen condiciones globales, ni regionales, para atraer la inversión privada internacional en América Latina. Y mucho menos, por supuesto, a países empobrecidos como Perú. Ya antes de esta crisis, el flujo de inversión directa internacional se concentraba en México, Brasil, Argentina.

En ese contexto, es necesario preguntarse ¿a qué podría venir alguna masiva inversión directa internacional al Perú actual?. Virtualmente todos los recursos “naturales” que en el Perú interesan hoy al capital internacional ya están bajo su control: minería, petróleo, gas. El fujimorismo vendió también y al remate, las empresas estatizadas bajo el velasquismo en electricidad, telefonía, refinerías de petróleo, redes de comercialización de petróleo y derivados, gasolina, gas licuado, kerosene. Y, por supuesto, las empresas estatales de capital financiero y de intermediación financiera, lo que fue seguido por la venta de las empresas financieras privadas al capital internacional. A la fecha no hay ningún Banco “nacional”, esto es, de peruanos. El único que aún lo era ha trasladado su sede legal a la isla del Gran Caiman, un conocido paraíso fiscal. El fujimorismo llamó a ese cambio de propiedad de las empresas, inversión de capital internacional. Además comenzó la comercialización de los servicios públicos, principalmente la seguridad social, ahora bajo control del capital internacional, y luego la educación y la salud públicas.

La extensión y la calidad de la tierra cultivable no es muy notable en el Perú. En la Sierra es muy fragmentada y montañosa, jamás pudo atraer capitales importantes. En la Selva, la buena tierra está lejos de las redes de transporte y de los centros administrativos y proveedores de servicios. Sólo en algunos valles de la Costa están las mejores y más aptas para cultivos de exportación, cerca de todas las rutas de transporte, de los centros urbanos de producción de servicios. Antes se destinaban a la caña de azúcar y al algodón. Pero esos cultivos entraron en crisis. Ahora, las tierras disponibles en la Costa están ya bajo control de capitalistas internacionales, españoles, israelitas, chilenos, produciendo y exportando, principalmente, espárragos y fresas. Y si se aprueba finalmente la nueva ley de preferencias arancelarias andinas (ATPA) en el Senado de Estados Unidos, imponiendo el uso de materias primas de ese país en la producción de textiles que luego podrían obtener preferencias arancelarias, inclusive los cultivos de algodón que son la base de la mediana agricultura de la Costa y de la decadente industria textil, podrían extinguirse.

Y finalmente, pero por encima de todo, la capacidad adquisitiva de la población peruana es una de las más bajas de toda la región. ¿A qué, pues, realmente vendría el capital internacional al Perú ?. Si la rentabilidad del capital fuera atractiva

¿porqué los capitalistas peruanos prefieren mandar su dinero, legal e ilegal, a los paraísos fiscales del mundo o a ser invertidos en otros países?

El proyecto del fujimorismo

La colonialidad del poder bloqueó, después de la Independencia, la democratización de la sociedad y su representación en un estado democrático y nacional. Después, la dependencia histórico-estructural inherente a ese patrón de poder desembocó en la asociación imperialista que ha continuado el mismo antagonismo con la democratización y la nacionalización de la sociedad y del estado. Por eso y de ese modo, el estado-nación y la ciudadanía real de la población son en América Latina procesos inconclusos y distorsionados, por supuesto más en unos países que en otros, si se compara, por ejemplo, México y Perú. Y el mercado interno, en el capitalismo moderno, es una consecuencia y una expresión de la ciudadanía, es decir, de la democratización de las relaciones entre las gentes, con todas las limitaciones y relativismos de toda estructura de poder. No a la inversa, como suele ser imaginado en la ideología liberal o en la del “materialismo histórico” estalinizado¹.

Después de México, el proceso revolucionario que afectó a la totalidad de los países latinoamericanos entre 1925 y 1935, fue derrotado en todos los países, sin excepción. La democratización radical de la sociedad, la destrucción de la colonialidad del poder, la nacionalización del Estado, no pudieron ser conquistadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos sociales y políticos que buscaban la democratización y la nacionalización de sociedades y estados, no lograron encontrar sino el incoherente y a la postre inconducente camino del nacionalismo-democrático-popular, al que las lenguas sueltas han terminado llamando “populismo”. Ese fue, de todos modos, el carácter del proceso iniciado entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis mundial de mediados de los 70 del siglo XX. Aunque incongruentes, limitados y erráticos, los resultados no fueron de ninguna manera desdeñables: la industrialización para el mercado local, la rearticulación de la acumulación como un circuito interno, aunque ligado al circuito internacional, la formación de los agentes sociales y de su estructuración en una nueva sociedad y su representación en un nuevo estado. Pero también, durante la crisis de los 70s, ese proyecto y ese proceso terminaron derrotados. Y esa derrota permitió la imposición del neoliberalismo como una expresión del período más predatorio del capitalismo, el dominio de la especulación financiera. En los países donde el estado-nación sólo pudo ser conquistado de modo muy parcial y precario, como en el Perú, bajo el neoliberalismo fueron desmanteladas todas las estructuras productivas vinculadas al proceso anterior, en particular la industria y su mercado local, y las estructuras sociales constituidas en su torno, la burguesía industrial, el salariado industrial urbano, las capas medias profesionales y tecnocráticas. Y, por supuesto, el estado fue reprivatizado bajo el control de los funcionarios del capital financiero internacional y de sus asociados locales. Ese fue el proyecto que el fujimorismo llevó a cabo en el Perú.

El fujimorismo del proyecto Kuczynski-Toledo

Si bajo las actuales condiciones internacionales, que según todas las indicaciones no serán de muy corta duración, ninguna masiva inversión directa internacional puede ser esperada. Y si no obstante, toda la política económica del gobierno de Kuczynski-Toledo está, explícita y oficialmente destinada solamente a dar confianza y garantías al capital internacional, ¿cuál es, en realidad, el proyecto que el

gobierno de Kuczynski-Toledo ha comenzado a poner en marcha?

Puesto que virtualmente todos los recursos importantes que podrían interesar al capital internacional ya están bajo su control, es necesario tratar de encontrar o de descubrir cuáles otros recursos podrían ser aún suficientemente atractivos como para pugnar por su control. Después de los remates del fujimorismo, en verdad quedan pocos y de poca importancia: una pequeña refinería de petróleo, puertos y aeropuertos de provincia (el puerto y el aeropuerto del Callao, los principales del país, ya están privatizados), algunas carreteras muy traficadas (acaba de entregarse un tramo vital de la carretera panamericana norte, a un consorcio privado, y se alza los precios del peaje en otras vías para hacerlas rentables para el capital privado), la producción de energía eléctrica regional, en el Sur y en el Centro, el servicio de agua potable en Lima y en las demás ciudades.

No obstante la protesta masiva de las poblaciones afectadas, Kuczynski y Toledo han reiterado que esos recursos serán de todos modos privatizados. El Estado vuelve a actuar contra la sociedad. Ahora puede entenderse mejor la política recesiva del actual gobierno: hacer lo mismo que hizo el fujimorismo, deprimir los precios de esos recursos y sanearlos financieramente, por supuesto con los recursos fiscales que se dice que no existen para finalidades de reactivación, para hacerlos atractivos y rentables para algunos grupos menores de capitalistas internacionales.

Las poblaciones de las provincias del Sur y del Centro, ahora también la de Lima, están movilizándose contra la privatización de las centrales termo-eléctricas y los servicios de agua y desagüe. Pero, astutamente, el gobierno pacta con los empresarios locales la distribución de beneficios, como acaba de hacerlo en Arequipa, la plaza fuerte de la protesta provinciana. Así, la burguesía local sería la socia, menor, pero socia al fin, del capital internacional. Y moverá, junto con el gobierno central, todos sus recursos para neutralizar y contener, o reprimir, la protesta popular.

Aunque de menos porte que las que fueron privatizadas bajo el fujimorismo, algunas de esas empresas, como las productoras de energía eléctrica o de agua potable son, sin duda, buenos negocios. Con todo, son negocios menores en los términos del capital financiero global. Pero una vez que la absoluta totalidad de los recursos y de los servicios en el Perú haya pasado al control del capital internacional o global, la masa de empleo tenderá a ser aún más reducida, la distribución de ingresos mucho más reconcentrada, la masa de pobres mucho más extendida y más pobre. La masa mayor de la población, desempleada y empobrecida hasta el nivel de la mera sobrevivencia, no podría ser directamente explotada. En la práctica, esa perspectiva reproduce el viejo control de factorías coloniales en los territorios colonizados.

¿Allí se agota el proyecto Kuczynski-Toledo?. No parece probable. La masa desempleada servirá, por supuesto, para deprimir los salarios de los pocos que logren obtener empleo. Pero el actual capital financiero es demasiado predatorio para reprimirse de despojar aún más a esas poblaciones dominadas, ya que no le interesa explotarlas de otro modo. Y la más eficaz y probada manera es el endeudamiento público. Puesto que por largo tiempo aún no será posible sobrevivir sin el mercado, esas masas empobrecidas, aunque pueden tampoco sobrevivir con

él, algo deberán comprar, bienes o servicios, inclusive los públicos. Y deberán, en consecuencia, pagar impuestos al Estado y éste deberá pagar los servicios de una eterna deuda internacional. En ese sentido específico, el pago de los servicios de una deuda internacional impagable y por lo tanto indefinidamente duradera, en países como el Perú, es el equivalente del histórico tributo colonial.

Eso es, precisamente, lo que Kuczynski-Toledo acaban de hacer. Con el argumento de que se requiere más recursos fiscales y no hay créditos internacionales, este gobierno decidió producir y vender “bonos soberanos”, esto es, bonos del Estado peruano, en el mercado financiero internacional. El resultado es el crecimiento de la deuda internacional, el aumento de sus tasas de interés y de las cifras que el Estado peruano debe pagar en los próximos años por el servicio de esa deuda. De ese modo, el Perú no quedará solamente convertido en territorio de factorías coloniales y poblaciones inmiseradas. Estas no podrían evitar ser convertidas en tributarias coloniales, a través de los impuestos que, de todos modos, pagarán al Estado para que éste los transfiera al pago de los servicios de la deuda internacional.

Cuando esas tareas hayan quedado cumplidas, o al menos debidamente encaminadas, Kuczynski podrá dejar el “Gabinete de Todas las Sangres” y Toledo podrá dar la impresión de que cede a las presiones populares para el cambio del Ministro de Economía. Pero nada, salvo una revuelta política exitosa de las víctimas, podría revertir o cambiar algo importante en la obra cumplida. Kuczynski podrá regresar a su país (es ciudadano de Estados Unidos) y a sus negocios privados. Su principal negocio es, precisamente, la privatización internacional. Ha estado activo en Rusia, en Taiwan, en Malasia, entre otros lugares. A los argentinos les interesará saber que fue él, nada menos, quien dirigió la privatización de Aerolíneas Argentinas.

En el Perú aún no ha ingresado al debate la idea de pago de la deuda internacional con territorio, que ha saltado a la luz con ocasión del desastre argentino y la revelación de encuestas sobre el canje de deuda por los territorios antárticos y patagónicos de ese país. Esa idea, junto con la prepotente propuesta de que Argentina debería renunciar a la autonomía política para admitir un tutelaje internacional, se mueven hacia la re-colonización formal. Así, convertir un país no solamente en un conjunto de factorías de carácter colonial, sino también en tributaria colonial a su población, podrían no ser suficientes para el proceso de globalización imperialista en curso. Mientras tanto parecen estar ya en el aire otros procedimientos en esa misma dirección, como veremos inmediatamente.

La operación “nuevos horizontes”: ¿la satelización del Perú?

El Perú es el único de los países latinoamericanos que, en los casi dos siglos transcurridos después de ganada su independencia, ha cedido formalmente en dos ocasiones su autonomía política en el orden inter-estatal del Hemisferio. Eso ocurrió bajo el Fujimorismo. Primero en 1992, tras el golpe del 5 de abril de ese año, el Estado peruano fue sometido al “monitoreo” formal de la OEA mientras se institucionalizaban los principales mecanismos del fujimorismo y se establecía la simulación liberal de una dictadura militar-tecnocrática tutelada por el Bloque Imperial Global. Volvió a ocurrir tras el fraude electoral del 2000, frente a la masiva revuelta popular que abrió una severa crisis política en el país, y con el obvio

propósito de bloquear la democratización de la sociedad y del estado que las masas demandaban 2 .

El sometimiento formal del estado peruano al control de los organismos del sistema inter-estatal hemisférico, no puede ser explicado sino por su extrema debilidad en tanto que estado-nación moderno. Dicha debilidad es, a su vez, consecuencia del completo desmantelamiento de la estructura social a la cual también representaba, o comenzaba a representar. Aquí no podemos ir, sobre estas cuestiones, más lejos que indicar que el fujimorismo impuso la separación virtualmente completa del Estado de toda ingerencia de la mayoría de la población, ya que incluso el voto fue objeto de fraude abierto. Eso implicó una re-privatización del control del estado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado peruano estaba bajo el control monopólico y, en consecuencia, autoritario, de la asociación oligárquico-imperial. Durante el fujimorismo, fue sometido al pleno control, igualmente autoritario, del Estado Hegemónico del Bloque Imperial Global y de sus agentes locales.

La estructura social que se había ido constituyendo por la urbanización de la sociedad, desde la Segunda Guerra Mundial, había logrado ir ocupando de modo parcial e irregular, pero no menos real, el Estado. La institucionalización de la producción y administración masiva y universal de servicios sociales por cuenta del Estado, la redistribución parcial, pero importante, de recursos de producción y de ingresos entre la población de trabajadores rurales y urbanos, fueron la marca de los espacios de representatividad política ganados por los sectores dominados de la población. Las nuevas capas medias, las fracciones de burguesía industrial y comercial urbana, el salariado urbano y rural, se fueron ampliando, con sus respectivas instituciones, a costa de la declinación y posterior extinción de los principales grupos de la coalición oligárquica. Pero la crisis capitalista de mediados de los 70 hasta fines de los 80, fragmentó y dispersó esa estructura social relativamente reciente, no aún afirmada y consolidada en el control del estado, pues aún no liberada plenamente de la colonialidad del poder y dependiente, en consecuencia, de las tendencias centrales del capitalismo mundial. El fujimorismo impuso la afirmación definitiva de ese proceso. De ese modo, sólo quedaron en el control del estado los militares y los grupos de nuevas capas medias ligadas a la especulación comercial, financiera, y al tráfico de drogas, cualquiera que fuera su oficio o su profesión de origen, bajo la tutela de los agentes del capital financiero y del Estado hegemónico.

El proceso de des-democratización y des-nacionalización de la sociedad y del estado en el Perú, no solamente hizo posible que la autonomía o soberanía del Estado fuera cedida a la OEA formalmente, pero ante todo al Estado Hegemónico Mundial. Hay que recordar a este respecto, no solamente la presencia dominante de Estados Unidos en la OEA, sino el hecho de que el Sub-Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y el Jefe del Comando Sur de las FFAA de Estados Unidos, con sus respectivos asistentes, estuvieron en Lima en el momento final de la crisis y remoción del fujimorismo, para asegurarse de que la transición podría hacerse sin intervención directa de las masas y de la continuidad de las políticas básicas del fujimorismo en la economía y en las relaciones con el sistema estatal hemisférico donde Estados Unidos tiene presencia dominante.

Ese proceso produjo también la desintegración de las agrupaciones sociales de los trabajadores y de sus respectivas instituciones. Produjo la generalizada crisis de identidad social en una población cada vez más heterógena en términos de

ubicación social y en consecuencia respecto de intereses específicos. La dispersión social y política ha implicado también la extrema dificultad de producir discursos sociales propios y de evaluar los ajenos. En consecuencia, de posibilidades prontas de reconquistar la perdida representación, incluso la intermediación, en el Estado. Los controladores del poder, reprivatizado el Estado, pudieron quedar libres de continuar operando en contra de la población de su propio país, cualesquiera que fueran las protestas de masas dispersas y reducidas solamente a demandar de ese nuevo Estado algunas migajas de sobrevivencia. El fujimorismo llegó a ser la ceñida expresión de esa situación. Y el régimen de Kuczynski-Toledo está sin duda empeñado en mantener y afirmar dicha situación, precisamente porque es el resultado de una transición muy controlada, de nuevo, por la OEA y por Estados Unidos.

No podría explicarse de otro modo la puesta en marcha de dos proyectos del Estado Imperial a través del del estado peruano bajo el gobierno de Toledo:

El Perú aceptó actuar y actuó como plataforma de la política del gobierno de Bush contra Cuba. El argumento de que el gobierno de Castro es autoritario es, obviamente, un burdo pretexto, no solamente frente a la prolongada protección de Estados Unidos a los peores regímenes dictatoriales de América Latina, sino al hecho de que ahora Bush recibe a uno de los más represivos dictadores del mundo, el sátrapa militar de Malasia, acusado incluso en Estados Unidos de atropellar los derechos humanos, y lo declara, cínicamente, héroe de la democracia y de la lucha contra el terrorismo. Estos hechos son ya de conocimiento internacional, lo que hace inútiles más comentarios.

El Perú habría aceptado permitir a Estados Unidos el uso del territorio peruano para las fuerzas armadas de ese país, libres de cualquier restricción en sus movimientos, inclusive para transportar equipos bélicos pesados, naves de guerra, aviones, helicópteros, sin ninguna intervención, ni autorización especial, para realizar una llamada "Operación Nuevos Horizontes", cuya fachada se presenta como una suerte de acción cívica de esas fuerzas armadas, aunque un documento suscrito por el Coronel USA Gilberto Pérez, remitido el 9 de febrero del 2001 al Director de Asuntos Especializados de la Cancillería peruana señala que "Nuevos Horizontes es un ejercicio conjunto/combinado de ingeniería, médico y de apoyo de servicio de combate, diseñado para mejorar la capacidad de reacción en entrenamiento conjunto de las fuerzas armadas de los Estados Unidos" (La República, 21 de abril del 2002).

Los Ministros de RREE y el de Defensa, del Perú y el Embajador de Estados Unidos en Lima, han negado que los acuerdos se hayan formalizado. Pero los documentos que se filtraron a la prensa de Lima, (La República, 20, 21 y 22/04/02) son plenamente reveladores. Las tratativas para este proyecto se iniciaron, según las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, desde el 1º de febrero del 2001, con los Ministros de Defensa y de RREE del Gobierno de Valentin Paniagua, llamado de "transición" entre Fujimori y Toledo. Y aunque los actuales ministros peruanos de RREE y de Defensa han negado haber tenido conocimiento de esas tratativas, el Embajador de Estados Unidos se encargó de aclarar en la prensa que dichos ministros, además del anterior de Defensa, han participado igualmente en estos tratos. Las declaraciones de las autoridades peruanas se llenaron de tanta ambigüedad y de contradicciones, incluídas las del vocero personal de Toledo, dejando abierta la sospecha de que esas negativas son una cortina de niebla diplomática sobre operaciones que están o estarán pronto en ejecución. Más aún,

como lo prueba el video mostrado en el Parlamento por el Congresista Javier Diez-Canseco, personal militar estadounidense ha estado ya operando en territorio peruano.

El texto de la propuesta oficial de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de RREE del Perú (fechado el 1° de abril y publicado en su integridad en el diario La República, en su edición del 22 de abril de este año), es completamente explícito sobre el carácter del proyecto. En lo fundamental, ese documento propone, primero, que el Perú otorgue estatus diplomático pleno “al personal militar y civil del Departamento de Defensa de los Estados Unidos” que se “encuentre desplegado en el Perú para conducir “Nuevos Horizontes”, aceptando como válido un documento de identidad estadounidense, para manejar vehículos, usar uniformes y realizar cualquier otro trabajo oficial, para la construcción de una “instalación militar” cuya finalidades no se indican, así como tampoco el número y tipo de personal civil y militar destinado al proyecto. Segundo, que el Perú “otorgue derechos de libre importación y exportación, así como la exoneración de inspección e impuestos, de los productos, propiedad y material, equipo, vehículos, barcos y aviones importados, adquiridos o exportados por o a nombre del gobierno de los Estados Unidos o por su personal en conexión con sus actividades en virtud a este acuerdo y que las partes se comprometan a tomar las medidas del caso a fin de asegurar en el Perú la protección del personal estadounidense y de su propiedad” (negritas añadidas). Tercero, el Perú debe autorizar el uso de equipos de radiocomunicaciones, y “los sistemas de comunicación orgánica de las Fuerzas Armadas americanas para uso oficial”. Cuarto, el gobierno de Estados Unidos tendrá “el derecho de elegir a los contratistas y los contratistas y sus empleados gozarán de los mismos privilegios otorgados al personal civil y militar de los Estados Unidos” respecto de licencias profesionales, importación y adquisición de equipoc y bienes. Finalmnente, el gobierno del Perú se comprometería a ceder a Estados Unidos los derechos de propiedad de todo aquello que el personal civil y militar de ese país use y necesite, incluyendo territorio, bienes, o equipos. Y, no faltaba más, se comprometería a pagar a Estados Unidos por toda reclamación respectiva. Así, pues, el territorio peruano será una plataforma de uso militar de Estados Unidos. Y eso no podría significar sino una etapa mas avanzada en la ocupación política y militar del área andino-amazónica, y probablemente la preparación de una ofensiva contra las guerrillas colombianas.

¿Porqué fue escogido el Perú para esos propósitos? Porque, como acabamos de hacer notar, se trata de un Estado extremadamente debilitado, separado de la intervención del grueso de su población. Pero también se trata de que en el Perú las masas descontentas, a pesar de su actividad reciente en las protestas callejeras, no han logrado aún organizarse, coordinarse y articularse como movimientos políticos, a diferencia de Bolivia o de Ecuador, donde también el Estado actúa en contra de la mayoría de habitantes de sus respectivos países, pero donde en cambio son activos y relativamente fuertes los movimientos organizados de los trabajadores y de las poblaciones que se identifican como indígenas y que son, en consecuencia, la mayoría de los habitantes de esos países, y que no solamente están en lucha contra este Estado, sino por otras formás institucionales de autoridad que expresen y desarrollen la democracia en la sociedad.

Estados Unidos tiene en Manta, Ecuador, una base aérea, instalaciones navales en Iquitos, puerto peruano en el Amazonas. Está negociando con Brasil el uso de una zona en el Amazonas, y acordó con De la Rúa, antes de su renuncia, el uso de un

territorio en la Patagonia. En el Ecuador, por medio de una empresa transnacional, está armando un ejército privado de mercenarios, con sus respectivos equipos militares. (¿Es también para la misma finalidad que propone otorgar a contratistas privados elegidos por Estados Unidos, los privilegios diplomáticos?). En Colombia participa ahora abiertamente en el conflicto interno de ese país. Desde cuando comenzó a hacerse visible, el proyecto de control del área andino-amazónica ha caminado sin duda un trecho muy grande y decisivo.

El “gabinete de todas las sangres”: transfugas y neoliberales

Con seguridad, lo más notable de la composición del gobierno de Toledo, es la cooptación de la inteligencia crítica procedente de las viejas capas burguesas y sus capas medias asociadas y que durante la crisis de los 60 del siglo anterior, gravitaron hacia las luchas de los trabajadores, se hicieron de izquierda, pues, y al final de los 70s emergieron como la capa dirigente de la Izquierda Unida, por un momento la más amplia coalición electoral liderada por las capas medias.

El Gabinete actual está claramente dividido en dos partes. En una, los ministerios que tienen acceso al control del poder real, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa o de las FFAA, el Ministerio del Interior, o de la Policía, el de Relaciones Exteriores, el de Justicia, encargado en esta coyuntura de administrar las causas estatales contra los principales responsables de la dictadura y de la corrupción del fujimorismo, el Ministerio de la Presidencia que maneja el mayor presupuesto del Ejecutivo y el vasto clientelaje organizado desde el fujimorismo, así como los del área llamada “económica”, Economía y Finanzas, Industria y Turismo, Energía y Minas, Agricultura, Pesquería, Transportes, están bajo el control de personas de reconocida filiación neoliberal, con excepción del Ministro de RREE, que proviene de la misma agrupación que los del área “social”, pero también de un linaje de diplomáticos de la vieja sociedad. De otra parte, varios de los ministerios de las áreas “social” y “política”: Educación, Salud, Trabajo, Mujer y Derechos Humanos, están ahora a cargo de personas provenientes de un pasado de “izquierda” no tan distante, aunque inicialmente, el Ministerio de Salud fue entregado al Secretario General de Perú Posible, el partido de Toledo, Luis Solari, médico. Y el y el Promudeh (Promoción de la Mujer y de los DDHH), a Doris Sánchez, también dirigente de Perú Posible. Ambos salieron relativamente pronto.

El primero por discrepancias dentro del Gabinete. La segunda, por un desmedido y publicitado énfasis en el uso nepotista y clientelar de los recursos públicos. Lo que es notable en esa distribución de funciones en el gobierno del Estado es que un grupo visible de los Ministros del área “social” provienen de la Izquierda Unida, hasta fines de los 80 la más amplia coalición electoral de la izquierda latinoamericana. Y todos ellos, menos uno, fueron dirigentes de Vanguardia Revolucionaria (VR), partido de la izquierda anterior a la “caída del muro”, uno de los pilares centrales de la Izquierda Unida, y antecesor inmediato del actual Partido Unificado Mariateguista (PUM). Nada menos que uno de sus ex Secretarios Generales es hoy Vice Ministro. También muchos, probablemente más de un centenar, de los “altos funcionarios” o “de confianza” en esta administración, tienen la misma procedencia.

Para cada uno de esos Ministerios y de sus cargos de “confianza” el gobierno podría haber elegido entre los profesionales y técnicos de la derecha, neoliberal, liberal o “apolítica”, por ejemplo entre los experimentados miembros de Acción Popular, cuyo anterior Secretario General es hoy Vicepresidente de la República y Ministro de Industria, Comercio y Turismo, “con licencia de su partido”, según lo acaba de

aclarar el más alto dirigente de Acción Popular. Y ya que se decidieron por gentes con pasado izquierdista, también podrían haber sido escogidas gentes del variopinto conjunto entero de la ex izquierda peruana, incluidos los Partidos Comunistas. Pero el hecho es, no obstante, que dichos ministros y el más de un centenar de cuadros de “confianza” en la administración de Toledo, fueron seleccionados exclusivamente de uno de los partidos de esa ex izquierda.

¿Se trataría, pues, de un co-gobierno entre el neoliberalismo y el socialismo? ¿O es una mera coincidencia? La primera posibilidad es, obviamente, nula. Y sería mucha coincidencia, si pueden haberlas de ese porte en la historia política latinoamericana, o en un pequeño país como el Perú donde todos, o casi, se conocen o son conocidos en la llamada “clase política”, que hayan sido elegidas sistemáticamente personas de uno solo de los ex partidos de “izquierda”, precisamente en este momento.

Si se observa con atención el desempeño del gobierno de Toledo, en su conjunto, y el de esos funcionarios de la ex izquierda, podrían aparecer algunas señales. En un primer momento de la observación, se nota que son esos ministerios y funcionarios los que reciben más directamente el embate de las protestas populares, precisamente porque están a cargo de las áreas “sociales”, es decir, las más sensitivas en la acción cotidiana del gobierno: trabajo, nada menos que el problema del empleo, de los salarios, de los derechos laborales; o educación y salud públicas, en un país donde esos servicios estatales han sido cuasi desmantelados y han sido comercializados, o como en el caso del Promudeh (Ministerio de Promoción de la Mujer y de los DDHH) la atención a los problemas de los “clubes de madres”, de las “asociaciones del vaso de leche”, de los “comedores populares”.

Parece, así, bastante claro que esos Ministerios son los encargados de la “lucha frontal contra la pobreza”, que es uno de los caballos de batalla, de Troya en realidad, del discurso de Toledo. Pero en una política que se destina a la producción de pobreza y de pobres, a la polarización social de la población, a la reconcentración creciente del control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, la práctica de semejante “lucha frontal” no puede ser sino frustrante y frustrada cada día, sobre todo para sus víctimas, y esa frustración no puede dejar de revertirse contra los encargados frontales de esa “lucha frontal”. Cuando los trabajadores desempleados, cerca de un millón de personas, piden empleo, apenas pueden recibir más promesas o un placebo que ha sido denominado “a trabajar urbano” y “a trabajar rural”, que puede otorgar apenas una ocupación precaria, de corto plazo, y una pequeña remuneración, menos de 100 dólares, simbólica en realidad, a solamente unos pocos cientos de trabajadores. Si los trabajadores piden aumento de sus salarios congelados, la respuesta es que hay deficit fiscal y no hay recursos, mientras se exonera de impuestos a las grandes empresas internacionales, o se entrega medio millón de dólares a los bancos en falencia, etc., etc. Si no hay medicinas, ni otros equipos en los hospitales, que han dejado de ser “gratuitos” desde hace una década, la respuesta es que no hay recursos para otra cosa. Si en las escuelas o en las universidades estatales, que dejaron también de ser “gratuitas” desde el fujimorismo, se exigen más recursos, ya es conocida la respuesta. Et coetera.

Así, a los ex dirigentes de VR escogidos para co-administrar el Estado en el gobierno de Toledo, se les ha encargado la tarea de servir de parachoques o de chivos expiatorios después frente a la protesta de las masas. Y varios de ellos cumplen

creativamente sus funciones. Y como son personas honestas las cumplen, sin duda, con toda buena fe. Por ejemplo, el Ministro de Trabajo creó un impuesto sobre los sueldos, para tener recursos para aumentar esos sueldos. El de Educación dispuso que los profesores primarios y secundarios se sometieran a una complicada prueba académica. Y en otras condiciones nacionales, esa habría sido sin duda una eficaz manera de estimular el mejoramiento académico y profesional de tal profesorado y de la educación pública del país. Pero los maestros peruanos han vivido toda la década pasada, bajo el fujimorismo, sometidos a salarios, en promedio, congelados en 90 dólares mensuales, cuando una familia promedio requería de no menos de 300 para subsistir; carentes por lo tanto de recursos, de materiales, de condiciones institucionales para mejorar o para sostener, siquiera, la desigual formación adquirida, en un Estado por completo desinteresado en la educación pública. Por supuesto, la amplia mayoría de los pobres maestros no pudo aprobar y tuvo que perder el empleo. Habría sido, sin duda, más equitativo primero dotar al profesorado de condiciones institucionales y de recursos para desarrollar su formación antes de someterlos a ninguna prueba, o tomar esa prueba no para despedirlos del trabajo, sino como base para organizar un sistema de desarrollo de la formación magisterial. De paso, sería muy interesante aplicar esa prueba a los funcionarios de “confianza” del Ministerio. Uno de los Vice Ministros afirmó que hay 110 mil maestros que no podrán encontrar empleo, porque la educación peruana no los necesita (La República, Mayo 04, 2002). Y aunque se admite un déficit de 25 mil maestros, han sido contratados solamente 2,500. No hay recursos para más, naturalmente.

Esa tarea de servir de buffer, de parachoques, y más adelante de chivos expiatorios para el régimen es, por supuesto, muy importante. Pero no será quizás muy prolongada. Y, probablemente, no es la única que los tráfugas deberán cumplir, ni la más importante para el futuro. Es casi seguro, incluso, que varios de ellos, si no todos, tengan que ceder pronto sus puestos a otras gentes del partido del gobierno, Perú Posible, que está presionando insistentemente para tener su propio turno en el manejo de los recursos fiscales. Con Perú Posible se amplía y se consolida un proceso que se instaló con el fujimorismo: la emergencia de una nueva y relativamente amplia capa de nueva pequeña burguesía, cuya dedicación central son los negocios y el comercio, cualesquiera sean sus oficios, profesiones u ocupaciones previas, y que ocupa o procura ocupar el Estado como el espacio central de su ejercicio. No es, pues, sorprendente que esa nueva capa sienta a los ministros y funcionarios de la ex izquierda, como rivales y obstáculos. El recambio, por eso, ya ha comenzado con algunos de los más “izquierdistas” de los funcionarios “de confianza”, a quienes Perú Posible acusa, precisamente, de ser “izquierdistas”. Cuando éstos se vayan, algunos de ellos, muchos quizá, podrían quedar desmoralizados de haber servido a los fines del momento y del modo más predatorio del capitalismo.

Para el futuro que ya ha comenzado, la cooptación de una parte de la inteligencia crítica para las tareas del neoliberalismo mostrará pronto sus más graves implicaciones. Si se observa la actual situación de la estructura social del país, desintegradas las agrupaciones sociales de trabajadores, en curso acelerado el desmantelamiento de las sedes y fuentes de las nuevas capas medias profesionales e intelectuales, deshechas las identidades sociales y políticas, debilitadas las instituciones de defensa de los intereses sociales de los trabajadores, dispersados los núcleos de organización política de las víctimas y descontentos del capitalismo, que en el Perú de hoy no es ya sólo subdesarrollado, sino feroz y predatorio, se puede entender sin dificultad la lentitud de la resistencia contra el neoliberalismo y

peor contra el capitalismo, la perplejidad de las masas para encontrar respuestas alternativas, la dispersión de las luchas, la heterogeneidad desmedida de las motivaciones y reclamaciones.

En esas condiciones, la cooptación política e intelectual de la pequeña capa de inteligencia crítica que durante la crisis de los 60s, se había casi desprendido de las capas medias tradicionales, “altas” y “blancas”, su reintegración en la colonialidad del poder que les ha permitido mantenerse aparte socialmente del grueso del pueblo peruano y de sus dirigentes, es una conquista, una victoria muy fuerte de los controladores del poder local e internacional. La profundidad de esa victoria, podrá ser medida en el futuro próximo cuando recomience en serio el debate intelectual y político desde el lado de los trabajadores y se confronten los problemas de la organización y de la movilización de las víctimas del capitalismo salvaje en un país empobrecido y aplastado.

Toledo llamó “Gabinete de Todas las Sangres” a su primer Gabinete Ministerial. No es seguro que la idea arguediana de “todas las sangres”⁴ estuviera representada en los apellidos de los ministros: Dagnino, Kuczynski, Rospigliosi, Solari, Lynch, Quijandría, Chang, Olivera, Waissman, Diez-Canseco Terry, Bruce, Villaran, Blondet, Loret de Mola. Por eso, quizás Toledo se refiriera a la más bien insólita alianza de neoliberales y de tráfugas de la vieja izquierda, en su Gabinete Ministerial. De todos modos, ya que esa es una de las insistencias del régimen, en todo caso una de las cuestiones abiertas desde las elecciones que llevaron a Toledo a la Presidencia de la República, esa composición de “sangres” en el Gabinete debe tener algún simbolismo. Ese simbolismo se refiere a la clasificación social básica que forma parte de la colonialidad del poder en esta sociedad, desde hace 500 años. Sin ella, quizás no habría sido tan fácil la cooptación de una parte de la inteligencia crítica al seno de la nueva fauna protagonista del neoliberalismo. Porque allí se expresa quizás, mejor que en otros campos, la violencia de la crisis del sistema de dominación, de la colonialidad del poder, pero sobre todo la violencia del esfuerzo de su restauración.

** Por motivos de espacio, en esta edición se eliminaron algunas partes. Por esta razón, éste artículo debe ser considerado como un resumen de otro trabajo más amplio.*

El autor

*** Anibal Quijano é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Binghamton, Nova York (EUA), e diretor do Centro de Investigações Sociais (Ceis), Lima. Foi professor da Escola de Sociologia da Universidade San Marcos, Lima, renunciando a todos os seus cargos em protesto contra a intervenção e a ocupação militar da universidade por Fujimori, em junho de 1995. É professor visitante em diversas universidades na América Latina, EUA e Europa.*

Notas

1. Sobre estas cuestiones, del autor, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. En Edgardo Lander, ed. Colonialidad del Saber y Eurocentrismo. CLACSO-UNESCO, 2000. Buenos Aires, Argentina. También América Latina en la Economía Mundial. En Problemas del Desarrollo, Instituto de Investigaciones

Económicas, UNAM, Vol. XXIV, No. 95, oct-dic. 1993. México. Y El Fantasma del Desarrollo en América Latina. En Revista Venezolana de Ciencias Sociales, No. 2, Universidad Central de Venezuela, 2000. Caracas, Venezuela.

2. Ver El fujimorismo y el Perú. Originalmente, en La Republica, 13/03/95, Lima, Perú. Y La OEA y el fujimorismo en el Perú, en América Latina en Movimiento, 137, 25/07/2000. Quito, Ecuador.

3. Ver ¿America Latina, sobreviviera ?. En Sao Paulo em Perspectiva, vol. 7, No. 2, pp. 66-67, Seade 1993. Sao Paulo, Brasil.

4. Se remite a la novela de José María Arguedas “Todas las Sangres”. Losada 1964. Buenos Aires, Argentina.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: <http://www.archivochile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)

Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quienes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu [sugerencia / errata..](#)

© CEME web productions 2003 -2007